

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 76001310501520190062901

Secretaría Sala Laboral Tribunal Superior - Valle del Cauca - Cali
<sslabcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 28/05/2024 8:23

Para: Despacho 11 Sala Laboral Tribunal Superior - Valle del Cauca - Cali <des11sltskali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Monica Viviana Montenegro Portilla <mmontenp@cendoj.ramajudicial.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (231 KB)
ALEGATOS TRIBUNAL - Jose Fernando del Carmen.pdf;

Cordial saludo.

Remito el mensaje recibido en el proceso del asunto.

Atentamente,

WOLFANG SANGUINO ORTEGA
Escribiente



Secretaría Sala Laboral | Tribunal Superior De Cali

Teléfono: 8980800 Ext 8102

Sitio web: www.ramajudicial.gov.co

Email: sslabcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Dirección: Calle 12 # 4 – 36 Oficina 106

De: Estefania Chica <abgdachica@gmail.com>
Enviado: martes, 28 de mayo de 2024 8:00
Para: Secretaría Sala Laboral Tribunal Superior - Valle del Cauca - Cali <sslabcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Santiago de Cali - Valle, Mayo del 2024.

Honorable Magistrado:
MP Dr. ALVARO MUÑOZ AFANADOR
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI – SALA LABORAL
sslabcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

REF.:	PROCESO ORDINARIO LABORAL DE SEGUNDA INSTANCIA
DEMANDANTE:	JOSE FERNANDO DEL CARMEN ARANGO VILLA
DEMANDADO:	SISTEMAS EXPERTOS EN SALUD LATINOAMERICA
RADICADO:	76001310501520190062901
ASUNTO:	ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

ANDREA ESTEFANÍA CHICA TORRES, mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.144.164.605 de Cali, Abogada en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional No. 263.193, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi condición de apoderada **JOSE FERNANDO DEL CARMEN ARANGO VILLA**, medio del presente memorial me permito exponer con todo respeto a su H. Despacho, para su consideración lo siguientes **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:**

Atentamente,

Andrea Estefania Chica Torres
Abogada Especialista en Seguridad Social
Celular: 322 6828893
<https://abogadaandreachica.com/>



Cuidemos el medio ambiente.

Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cuestión de todos.



Remitente notificado con
[Mailtrack](#)

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



Santiago de Cali - Valle, Mayo del 2024.

Honorable Magistrado:
MP Dr. ALVARO MUÑOZ AFANADOR
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI – SALA LABORAL
sslabcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

REF.:	PROCESO ORDINARIO LABORAL DE SEGUNDA INSTANCIA
DEMANDANTE:	JOSE FERNANDO DEL CARMEN ARANGO VILLA
DEMANDADO:	SISTEMAS EXPERTOS EN SALUD LATINOAMERICA
RADICADO:	76001310501520190062901
ASUNTO:	ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

ANDREA ESTEFANÍA CHICA TORRES, mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.144.164.605 de Cali, Abogada en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional No. 263.193, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi condición de apoderada JOSE FERNANDO DEL CARMEN ARANGO VILLA, medio del presente memorial me permito exponer con todo respeto a su H. Despacho, para su consideración lo siguiente:

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

Solicito al Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali se ADICIONE a la **SENTENCIA PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA POR EL JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI**, por los siguientes motivos de derecho, legales y jurisprudenciales.

En Colombia, la "vinculación en solidaridad" es esta responsabilidad que debe garantizar que los trabajadores reciban un trato justo y equitativo en términos laborales. De forma similar, la Corte Constitucional ha definido la solidaridad laboral como *“aquel instrumento que busca el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, entre el beneficiario del trabajo o dueño de la obra y el contratista independiente, cuando éste se vale de aquellos para desarrollar el objeto contratado y éste corresponde al giro ordinario de los negocios del beneficiario”*.

En resumen, en Colombia, la vinculación en solidaridad entre la empresa usuaria y la empresa intermediaria busca proteger los derechos laborales de los trabajadores contratados a través de terceros, asegurando que puedan reclamar sus derechos tanto a la empresa intermediaria como a la empresa usuaria.

No obstante, lo anterior, y con la finalidad de proteger a la clase asalariada, el artículo 34 del C.S.T. también establece la figura de la responsabilidad solidaria. En el sentido que, *“el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores”*.(Subrayado fuera del texto).

De lo anterior se interpreta que la solidaridad surge cuando la obra, labor o actividad contratada con el contratista independiente, es propia de desarrollo normal del empleador.

Si la actividad contratada es parte del proceso de producción, o corresponde a cualquier actividad que normalmente debe desarrollar la empresa para poder operar, entonces hay solidaridad con las obligaciones laborales incumplidas por el contratista, en este caso, mi representado era un cirujano, realizando una prestación de servicios médicos a un HOSPITAL ORTOPEDICO que claramente tienen como objeto social, la prestación de servicios de salud.

De ahí que, surge la responsabilidad solidaria, cuando se contrata a un contratista a realizar actividades propias de su objeto social a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 9435 del 24 de



abril de 1997 con ponencia del magistrado Francisco Escobar Henríquez define al contratista independiente en los siguientes términos:

“Con arreglo al artículo 3 del Decreto 2351 de 1965, es una persona natural o jurídica que mediante un contrato civil o mercantil se compromete, a cambio de determinada remuneración o precio, a realizar una o varias obras o a prestar un servicio en favor de la persona natural o jurídica con quien contrate. El contratista asume los riesgos propios de la función a su cargo, debe ejecutarla con sus propios medios y goza de libertad y autonomía técnica y directiva. Para poder cumplir su obligación requiere contratar trabajadores, cuya fuerza de trabajo ha de encauzar y dirigir en desarrollo del poder de subordinación, pues se trata de un verdadero empleador y no de un mero representante o intermediario respecto del contratante o beneficiario de la obra o del servicio. Es que con este no se compromete a llevar trabajadores, sino a lograr por su cuenta y riesgo a cambio de un precio, el objetivo propuesto, de forma que en este orden de ideas su actividad económica no es la intermediación laboral, sino la especialidad que les permite construir la determinada obra o lograr la prestación del servicio.

En lo que hace al beneficiario del servicio o dueño de la obra, es claro que no es patrono en términos formales o reales con respecto de los trabajadores requeridos por el contratista, ya que no ejerce la subordinación laboral frente a aquellos o este, de suerte que solo es acreedor de un resultado o de un concreto servicio. Con todo, la ley laboral lo hace responsable solidario por la remuneración, prestaciones, indemnizaciones y derechos laborales correspondientes a los trabajadores del contratista, siempre y cuando la obra o servicio que éste deba cumplir no sea extraña a las actividades normales propias de la respectiva empresa o negocio del contratante.”

En definitiva, el alcance de la responsabilidad solidaria no es otro que, la empresa beneficiaria del trabajo o dueña de la obra responda por el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones que el empleador incumpla.

La jurisprudencia colombiana ha generado una serie de fallos relacionados con la vinculación en solidaridad entre la empresa usuaria y la empresa intermediaria.

“3. Alcance de la responsabilidad solidaria definida en el artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo (C.S.T.)

Para valorar las situaciones expuestas por el Fondo Nacional del Ahorro, en cuanto a los motivos de duda surgidos con las órdenes 16 y 17 de la Sentencia T-461 de 2015, la Sala explicará: (i) algunos elementos que componen la responsabilidad solidaria definida en el artículo 34 del C.S.T., (ii) así como el papel de la entidad beneficiaria del trabajo, en este caso el FNA, frente a las obligaciones laborales.

3.1. El beneficiario del trabajo o servicio será solidariamente responsable de las acreencias laborales e indemnizaciones fijadas en el artículo 34 del C.S.T.

Para la Corte Constitucional no cabe duda que los trabajadores en misión, es decir aquellas personas que son contratadas por una Empresa de Servicios Temporales para cumplir funciones en otra, comúnmente llamada empresa usuaria, deben gozar de los derechos laborales fijados en el Código Sustantivo de Trabajo, en forma equivalente a aquellos sujetos que asumen las mismas funciones en la empresa usuaria. En este sentido, tendrían derecho a un salario ordinario y beneficios laborales, como transporte, alimentación y recreación, establecidos para los mismos trabajadores, y la compensación monetaria por vacaciones y prima de servicios proporcional al tiempo laborado, por citar algunos ejemplos.[17]

El responsable del cumplimiento de las referidas obligaciones y otras que se deriven de la relación laboral es la Empresa de Servicios Temporales, quien es el verdadero empleador, siempre que no se utilice esta figura para encubrir otras relaciones de trabajo.[18] Lo anterior, acorde con el artículo 34 del C.S.T. que dispone que “son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio



determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva". (Negrilla fuera del texto).

Así las cosas, quienes celebran un contrato de trabajo con una Empresa de Servicios Temporales establecen una relación laboral con ésta, de carácter subordinado, hasta tanto finalice la obra o el usuario prescinda de los servicios del trabajador.[19] Dicho de otro modo, para todos los efectos, la Empresa de Servicios Temporales es su empleador, quien debe asumir, por ejemplo, el pago de los salarios, prestaciones sociales y, si es el caso, las indemnizaciones a las que haya lugar.[20]

No obstante lo anterior, y con la finalidad de proteger a la clase asalariada, el artículo 34 del C.S.T. también establece la figura de la responsabilidad solidaria. En el sentido que, "el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores".(Subrayado fuera del texto). De forma similar, la Corte Constitucional ha definido la solidaridad laboral como "aquel instrumento que busca el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, entre el beneficiario del trabajo o dueño de la obra y el contratista independiente, cuando éste se vale de aquellos para desarrollar el objeto contratado y éste corresponde al giro ordinario de los negocios del beneficiario" (Negrilla fuera del texto).[21] En definitiva, el alcance de la responsabilidad solidaria no es otro que, la empresa beneficiaria del trabajo o dueña de la obra responda por el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones que el empleador incumpla.

Sobre este punto se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la fuente de la solidaridad no es el contrato de trabajo o la actividad desarrollada entre las partes, sino la ley (art. 34 C.S.T.), la cual es la causa eficiente de la solidaridad en esta materia. [22] En consecuencia, si el legislador no previó otro tipo de solidaridad en la responsabilidad de la empresa usuaria, el operador judicial no puede crearla o extender sus efectos más allá de las situaciones fijadas en el artículo 34.[23]

La Corte Constitucional ha vinculado a empresas usuarias que, si bien podían adelantar la actividad directamente, a través de sus propios trabajadores, decidieron contratar a terceros para que realizaran dicha tarea y, de esta manera, resultaron responsables solidarias para el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tienen derecho los trabajadores.[24] Esta Corporación ha utilizado acepciones como las siguientes, a través de las cuales la empresa beneficiaria resulta responsable solidaria de "las obligaciones laborales que [el] contratista independiente incumpla"[25], "del incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo",[26] o "de la relación laboral"[27], "del incumplimiento de las obligaciones del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones"[28], "por las obligaciones laborales insatisfechas"[29] y para facilitar "a los empleados el cobro de los salarios y prestaciones sociales y hace frente a posibles incumplimientos, dificultades económicas o simulaciones del contratista independiente".[30]

Particularmente, en la Sentencia T-1127 de 2002 [31], la Corte Constitucional examinó el principio de solidaridad entre un contratista particular y la entidad contratante. Así, afirmó que existe "la responsabilidad solidaria entre los contratistas independientes y el beneficiado con el trabajo o dueño de la obra, en lo relativo a las obligaciones laborales de los primeros". Por lo tanto, en virtud del artículo 34 del C.S.T., ordenó al contratista particular y Acuavalle S.A., como empresa beneficiaria, asumir la prestación de seguridad social del trabajador, quien vio afectado su estado de salud por una caída en un tanque de almacenamiento de agua, propiedad de la empresa contratante.

Este criterio también fue utilizado en la Sentencia T-759 de 2008[32], oportunidad en la cual la Corte revisó una tutela contra la empresa de servicios temporales Gentes S.A., y la Comercializadora Internacional Cobres de Colombia Ltda., en su calidad de usuaria. Esta Corporación amparó los derechos fundamentales del actor, ordenando el reintegro a la temporal, quien dio por terminado el contrato de trabajo sin considerar su situación de discapacidad.



Además, señaló como una opción de reintegro la empresa usuaria, debido a la responsabilidad solidaria de ésta, surgida en los términos del artículo 34 del C.S.T. De lo anterior se desprende que, por regla general, la orden de reintegro emitida por la Corte, se dirige a la empresa temporal.

Asimismo, en la Sentencia T-1119 de 2008 [33], este Tribunal resolvió positivamente la pretensión de reintegro de la parte actora, quien al darse por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, sufrió la afectación de los derechos a la igualdad, el trabajo y la seguridad social. En consecuencia, la Corte ordenó a Serviactiva CTA, como su empleadora, el reintegro en condiciones que no afecten su salud e integridad física. Subrayo, además, la responsabilidad solidaria de SaludCoop EPS, Seccional Tolima, “del pago de los salarios y todas las respectivas prestaciones sociales que la demandante haya dejado de percibir desde la fecha de terminación del vínculo laboral hasta su reintegro”.

En la Sentencia T-503 de 2015 [34], el Tribunal Constitucional previno a las empresas Operadores de Servicios como Sierra SA ESP y Asear Pluriservicios SAS, para que en atención a los principios de la estabilidad en el empleo y de primacía de la realidad sobre las formas, no efectúen prácticas que desconozcan los derechos laborales y prestacionales de los trabajadores y, al contrario, apliquen estrictamente la normativa constitucional y legal que regula el derecho al trabajo y la contratación con empresas de servicios temporales.

En síntesis, acorde con la jurisprudencia constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la figura de la solidaridad laboral, consagrada en el artículo 34 del C.S.T, se hacen extensivas las deudas insolutas al obligado solidario, por su calidad de dueño o beneficiario de la obra contratada.[35] Es decir, es responsable del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tienen derecho estos trabajadores, por vía de la solidaridad.[36]

3.2 El beneficiario o dueño de la obra es un garante de la totalidad de las obligaciones laborales que el empleador incumpla

En estricto sentido, lo que pretende el artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo es proteger los derechos laborales de quien funge como empleado, por ser la parte más débil de la relación contractual. Y, de esta manera, no se vea afectado en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que fueron incumplidas por su empleador.[37]

Por esta razón, la empresa que contrata con terceros la ejecución de algunas obras o servicios, se convierte en un garante de la relación laboral. Así lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, cuando afirma que “el obligado solidario, en el área del derecho del trabajo, no es otra cosa que un garante para el pago al trabajador de sus acreencias laborales se hace en alusión expresa a la norma citada”.[38]

Lo anterior, no significa que la culpa del empleador se extienda al tercero beneficiario, sino que le son exigibles las deudas laborales surgidas por dicha culpa.[39] Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha distinguido la culpa del contratista de la figura de la solidaridad laboral establecida en el artículo 34 y, con ello, ha considerado que tal responsabilidad del beneficiario de la obra no puede asimilarse ni confundirse con la vinculación laboral, que tiene un alcance y consecuencias distintas, predicables únicamente de su relación con el empleador.[40] En otras palabras, la relación del obligado solidario con el contratista independiente, apenas lo convierte en un garante de sus deudas insolutas.[41]

La calidad de garante, adicionalmente, se predica porque el contrato con el trabajador en misión no es laboral. Al contrario, se configura un contrato de obra entre el trabajador y el dueño de la obra o servicio que implica, según la jurisprudencia constitucional, “que el contratista desarrolle el trabajo con libertad, autonomía técnica y directiva y con asunción de todos los riesgos de su propio negocio. Como contraprestación, recibe el pago de un precio determinado previamente. En este sentido, como elemento fundamental de la relación de obra es el hecho que el contratista debe ejecutar la labor encomendada con sus propios medios, sin utilizar los de la empresa contratante”.[42]



Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que esta modalidad (contrato de obra) no puede ser un mecanismo utilizado por las empresas, o entidades, para eludir el cumplimiento de obligaciones laborales, cuando decidan contratar con terceros el desarrollo de funciones propias.[43] Tampoco debe ser utilizada la tercerización para “disminuir los costos económicos y encubrir una verdadera relación laboral”.[44] En este sentido, la Corte Constitucional ha manifestado que “si la necesidad del usuario amerita la contratación permanente del servicio de los trabajadores en misión, debe acudir a otra forma de contratación distinta a la que se cumple a través de las empresas de servicios temporales”.[45]

Ahora bien, para la Corte Constitucional, el beneficiario del trabajo o la obra, en su calidad de garante, tiene que responder cuando “la empresa contratista incumple, total o parcialmente, sus deberes como empleadora, de uno o varios trabajadores que ejecutan la labor en beneficio de la empresa” (Negrilla fuera del texto).[46] Esta situación lleva a concluir como, en efecto, ha hecho esta Corporación, que el trabajador puede requerir el cumplimiento de los derechos laborales a uno o ambos sujetos involucrados en su actividad laboral, pues es “el llamado (...) a reclamar las obligaciones dejadas de pagar por el contratista, bien sea al contratista, al beneficiario o a los dos”.[47]

Vale la pena resaltar, además, que en su calidad de garante, el beneficiario de la obra tiene la facultad legal para ejercer la acción de repetición, por el monto que hubiera pagado, y en contra del contratista que incumplió las obligaciones laborales que se encontraban a su cargo.[48] Así mismo, tiene la potestad para implementar las medidas de supervisión y control encaminadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, “con el objetivo de reducir el riesgo de la declaratoria de responsabilidad solidaria en su contra”.[49]

En suma, conforme el artículo 34 del C.S.T. y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la búsqueda de proteger los derechos del trabajador en misión, la empresa beneficiaria del servicio será garante y, por lo tanto, solidariamente responsable de las acreencias laborales e indemnizaciones legales, total o parcialmente. Sin que ello impida que la misma pueda repetir contra el verdadero empleador, o adoptar las medidas adecuadas para vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del contratista independiente.” (Auto 323/17 de la Corte Constitucional)

Estos son solo algunos ejemplos de jurisprudencia relevante en Colombia sobre la vinculación en solidaridad entre la empresa usuaria y la empresa intermediaria en materia laboral.

NOTIFICACIONES:

Recibo en la Calle 59 1C Nro. 125, Torre 3, Apartamento 202, del Barrio Torres de Comfandi, Cali, Valle del Cauca, Celular 322 6828893. Correo Electrónico: abgdachica@gmail.com

Atentamente,

ANDREA ESTEFANÍA CHICA TORRES

C.C. No. 1.144.164.605 de Cali (V).

T.P. No. 263.193 del C.S. de la J.

Notificaciones judiciales:
Email: abgdachica@gmail.com
Celular: 322 6828893